

## DE LA «HOJA DE RUTA» A LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

**Farid Kahhat (\*)**

Los atentados suicidas contra civiles israelíes son, sin duda alguna, actos terroristas de una crueldad inenarrable. Son, por añadidura, un serio obstáculo en el camino de cualquier negociación de paz. Pero no son el único obstáculo, y probablemente tampoco sean el obstáculo principal. Desde el inicio de la segunda «Intifada» palestina en septiembre del 2001, por cada israelí muerto en este conflicto han muerto en promedio tres palestinos. La diferencia radicaría, según el gobierno israelí, en el hecho de que mientras los grupos armados palestinos tienen como blanco deliberado a civiles inermes, el ejército israelí hace lo humanamente posible por evitar las bajas civiles entre los palestinos. Si ello en verdad fuera así, sería difícil explicar cómo es que, durante el mismo período, por cada niño israelí han muerto cinco niños palestinos (es decir, una desproporción aún mayor que la que impera en la población en su conjunto), o por qué durante la primera Intifada (entre 1987 y 1991), por cada israelí morían aproximadamente 25 civiles palestinos. En otras palabras, habría que creer que, sin proponérselo, el ejército israelí causa una mayor proporción de bajas civiles (tanto en términos absolutos como relativos) que Hamas o Jihad Islámico, para quienes los civiles son un blanco explícito.

Eso es lo que alega el Estado de Israel cuando califica las acciones de Hamas y Jihad Islámico como actos terroristas, pero sostiene que las víctimas de sus propias acciones son producto de un lamentable pero comprensible «daño colateral». Sin embargo, cuando uno pasa revista al tipo de incidentes que dan cuenta de ese presunto «daño colateral», se encuentra con casos como estos: las fuerzas armadas israelíes emplean regularmente obuses de fragmentación (prohibidos por convenciones internacionales), lanzados desde tanques en áreas civiles. Otra práctica habitual es la de «sembrar» artefactos explosivos en plena vía pública, los que en tan solo un incidente provocaron la muerte de cinco niños palestinos. Un último ejemplo es el uso de misiles conteniendo hasta una tonelada de explosivos, lanzados contra edificios residenciales en Gaza, la ciudad más densamente poblada del mundo (causando hasta quince muertes en un solo ataque, catorce de ellas civiles, la mayoría de ellos menores de edad). Dicho sea de paso, esta última práctica ha llevado a que 27 pilotos

de la fuerza aérea israelí se rehusen públicamente a llevar a cabo ese tipo de misiones. Dada la ostensible negligencia que refleja esa conducta, el carácter sistemático de la misma, y la absoluta impunidad con que se repite, esos hechos califican como casos de terrorismo de Estado (la clase de terrorismo que produce el mayor número de muertes en el mundo).

Por lo demás, la muerte por armas de fuego no es la única acción del ejército israelí (por no mencionar a los colonos armados), de la que son víctimas los civiles palestinos. Desde 1967 las viviendas y/o terrenos agrícolas de los palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental son confiscados en forma sistemática, o sus propiedades y cultivos son destruidos como actos de represalia política. El hecho de protestar contra esas prácticas suele acarrear la prisión por tiempo indefinido, sin cargos, juicio o acceso a un abogado. Los presos palestinos, a su vez, suelen ser víctimas de tortura (práctica que hasta 1999 era legal en Israel, y que desde entonces continúa en forma ininterrumpida, según organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos como Btselem). Además de ello, desde hace unos años absolutamente todos los centros poblados palestinos se encuentran cercados (literalmente) por vallas de contención, unidades militares, asentamientos, o carreteras de uso exclusivo para israelíes. El tránsito entre ellos es virtualmente inexistente, y dentro de ellos es común que el ejército israelí imponga toques de queda que se prolongan en forma indefinida. Según informes de la AID (agencia del gobierno de los Estados Unidos, el principal aliado de Israel), el cerco israelí sobre los centros de población es la principal causa de que la desnutrición entre los niños palestinos se haya incrementado en alrededor de un 200%. Además, desde hace un año Israel viene construyendo un muro que habrá de separarlo de las ciudades palestinas de Cisjordania, internándose dentro de ese territorio y ocasionando graves dislocaciones sociales y económicas entre la población árabe, según consta en un reporte del Banco Mundial. Huelga decir que todo lo anteriormente descrito es consecuencia de la ocupación que Israel ejerce sobre los territorios palestinos que capturó en 1967 (Vgr., Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental) y que ha convertido a los palestinos que habitan esas tierras en el único pueblo que no tiene ciudadanía en ningún Estado del planeta.

En síntesis, si bien existe violencia contra civiles inermes por ambas partes, la abrumadora mayoría de las víctimas civiles a lo largo de este conflicto han sido palestinas. De otro lado, la causa última de la violencia es la ocupación militar, ilegal desde la

perspectiva del derecho internacional, que Israel ejerce sobre los territorios que capturó en 1967. Israel no puede despojar a los palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental de derechos políticos, humanos y de propiedad, y esperar al mismo tiempo que estos últimos se resignen pacíficamente a su suerte.

Es precisamente por la situación descrita que la mayoría de las exigencias planteadas por la «Hoja de Ruta» en su primera etapa atañen a Israel, y que éstas deben llevarse a cabo en forma simultánea con el cumplimiento de las exigencias planteadas a la Autoridad Nacional Palestina. Las exigencias en cuestión son, entre otras, las siguientes: que el nuevo gobierno palestino incaute las armas que circulan ilegalmente en los territorios autónomos, y que confronte y desarticule toda organización que conduzca o planee ataques violentos contra Israel. Simultáneamente, el gobierno de Israel deberá cesar la construcción de asentamientos israelíes en territorios palestinos, y dismantelar los puestos de avanzada para la construcción de nuevos asentamientos erigidos a partir de marzo del 2001. Deberá, además, cesar sus incursiones armadas en territorios palestinos, transferir los fondos retenidos a la Autoridad Nacional Palestina, levantar los toques de queda impuestos regularmente en las ciudades bajo su ocupación, y reducir las restricciones de movimiento entre ellas. Deberá, por último, retirarse progresivamente de esas ciudades.

La simultaneidad de estos pasos obedece a una lógica elemental: no se puede esperar que el nuevo gobierno palestino dilapide su escaso capital político iniciando una guerra civil al interior de su sociedad, mientras las políticas de colonización israelíes, y la represión que las acompaña, continúan sin interrupción.

Lamentablemente, no ha ocurrido nada de ello. Por ejemplo, cuando en una entrevista en el *Jerusalem Post* se le recordó a Sharon que la «Hoja de Ruta» exige el cese de la construcción de asentamientos en territorios ocupados, su respuesta fue diáfana y contundente: ningún gobierno estadounidense respaldó jamás la construcción de esos asentamientos, lo cual nunca impidió que sucesivos gobiernos israelíes continuaran con su construcción. Ahora, además, Israel y los Estados Unidos exigen que los palestinos cumplan con sus obligaciones bajo la «Hoja de Ruta» (resumida por George Bush en la consigna de «acabar con el terrorismo»), antes de que Israel se digne a dar el primer paso. Con ello no solo se contraviene el texto de esa iniciativa, sino que además se excluye de su implementación a los demás integrantes del «Cuarteto» que, según el propio texto, debía supervisar su

ejecución (es decir: la ONU, la Unión Europea y Rusia, además de los Estados Unidos).

En otras palabras, se exige a la Autoridad Palestina, maltrecha tras años de acecho israelí y lastrada por su propia ineptitud, librar una guerra civil para derrotar a Hamas y Jihad Islámico, cosa que Israel, país dotado del ejército más poderoso del Medio Oriente y uno de los servicios de inteligencia más eficaces del mundo, no ha podido lograr. A cambio de ello Israel no se ha comprometido en forma explícita y categórica a absolutamente nada. Por si fuera poco, todo este tinglado descansa sobre una condición previa digna de un orate: que Yasser Arafat ceda gentilmente las riendas de las fuerzas de seguridad palestinas a un primer ministro cuya misión será sepultarlo políticamente. A cambio de ese gesto, Israel ofrece a Arafat un variado menú de opciones: el confinamiento, la cárcel, el destierro o la muerte. No pregunte el lector por qué fracasó la gestión de Mahmoud Abbas o por qué Arafat se muestra algo inapetente.

Solo haría un par de atingencias adicionales, a modo de conclusión. La posición oficial israelí en torno a estos temas suele esgrimir dos argumentos: el primero arguye que los palestinos recibieron de Ehud Barak en las negociaciones de Camp David el año 2000 una «oferta generosa», que éstos habrían desestimado sin motivo aparente. Como notará el lector cuando se encuentre con ese argumento, no se suele citar documento alguno donde conste esa oferta, sencillamente porque no existe. Podrá remitirse, sin embargo, al mapa que el grupo pacifista israelí «Gush Shalom» reproduce en su página de Internet<sup>1</sup>, así como a la profusa literatura, tanto de fuentes occidentales como israelíes, que cuestiona esa versión de los hechos.<sup>2</sup>

El segundo argumento oficial esgrime el sofisma de que la mayor parte de la población palestina de los territorios ocupados se encuentra bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, por lo que la ocupación habría cesado ya. Lo que no se dice es que la

---

<sup>1</sup> [www.gush-shalom.org](http://www.gush-shalom.org)

<sup>2</sup> Hussein Agha, Robert Malley, «Camp David: The Tragedy of Errors», *The New York Review of Books*, 9 de agosto del 2001; Robert Malley, «Fictions about the Failure at Camp David», en *The New York Times*, 8 de julio del 2001; Charles Enderlin, *Le Rêve Brisé, Histoire de l'échec du processus de paix au Proche-Orient, 1995-2002*, Fayard, Paris, 2002; Ewen Mac Askill, «The Real Deal, Israel's view that Arafat missed a chance for peace under Barak is dangerously deluded», en *The Guardian*, Londres, 14 de abril del 2001; Menahem Klein, entrevista en *Ha'aretz*, Tel Aviv, 2 de mayo del 2002; Gush Shalom, en: [www.gush-shalom.org](http://www.gush-shalom.org)

gran mayoría de los territorios ocupados siguen bajo el control del Estado de Israel; que la Autoridad Nacional Palestina, antes que presidir un Estado soberano, a duras penas ejerce las funciones de un gobierno local; que una parte considerable de sus ingresos son recaudados, y retenidos como represalia política, por Israel; y que, como vimos, no existe libertad de circulación entre (y, en ocasiones, dentro de) las zonas bajo autonomía palestina (de hecho, el columnista del *New York Times* Thomas Friedman, de religión judía y ferviente defensor de Israel, aunque no a cualquier precio, sostiene que los palestinos de los territorios ocupados viven en «jaulas»). Por lo demás, Israel realiza incursiones y ataques dentro de esas zonas virtualmente a voluntad, cuando no las ocupa nuevamente por tiempo indefinido (como es el caso, en este momento, de la mayor parte de Cisjordania).

Por lo demás, este tipo de argumentos obedece a una estrategia que pretende separar a la población de los territorios con el propósito de facilitar su colonización. En otras palabras, es una estrategia que, desde el Plan Allon de 1967 hasta el discurso que Sharon diera en Herzlyia en diciembre del 2002, pretende desprenderse de la responsabilidad sobre la gente reteniendo el control sobre sus tierras. Solo así se explica que, al tiempo que negocian sobre el estatus final de los territorios ocupados, sucesivos gobiernos israelíes continúen creando sobre ellos hechos consumados que, suponen, ninguna negociación podrá revertir.

-----

(\*) Economista peruano-palestino. Doctor en Gobierno por la Universidad de Texas (Austin). Actualmente es profesor en la Facultad de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con sede en México.